

Bolivia: de la derrota de la oligarquía a la lucha contra el Gasolinazo

Reaparecen los fantasmas de Octubre

Martín Camacho

“El gobierno ha demostrado que el ‘socialismo comunitario’ tiene poderosos argumentos de imagen –ondear la Wipala y cosas así– pero muy poco para ofrecer a los que se llevan la mano en el bolsillo” (Pulso, 9-15 de mayo de 2010).

Intentaremos reflejar lo acontecido en los últimos años en Bolivia; cómo se pasó de las peleas “en las alturas” con la oligarquía del Oriente, hoy mediatizadas, a la incorporación a la pelea de sectores de las propias bases del MAS y de los trabajadores y, finalmente, el verdadero *desborde social* que significó la pelea contra el Gasolinazo derogado por Evo Morales en las últimas horas del 31 de diciembre pasado, cuyas consecuencias continúan meses después.

Si, por un lado, el gobierno masista parecía estabilizado, acontecimientos como los de 2010, con su remate en el esbozo de verdadera rebelión social de finales de año son el anuncio de la más importante novedad política en Bolivia del último período: *un sector de las masas explotadas y oprimidas ha comenzado a hacer una experiencia con las limitaciones del gobierno reformista*. Éste no sólo aparece distanciado de algunas franjas más “radicales” en el seno del propio oficialismo: sectores afines al MAS salieron durante 2010 a las calles a pedir mejores condiciones de vida, por no hablar del estallido de diciembre último, cuya composición era sin duda abrumadoramente masista.

El conjunto del proceso está expresando que, al menos en lo inmediato, ha quedado atrás lo que venía sucediendo hasta mediados de 2008: la amenaza de secesión de la oligarquía del Oriente. Este chantaje se frustró con el fracasado levantamiento de agosto-septiembre de ese año en Santa Cruz, Pando, Beni y Tarija, un movimiento cuasi secesionista-golpista que terminó en desastre. La

frustración por parte del Ejército del intento terrorista del 2009 (en apariencia de un grupo mercenario financiado por sectores empresarios para producir un magnicidio) vino a consolidar el desbande de la oposición de derecha.

En ese contexto, en 2009 y 2010 lo más dinámico vino de las *contradicciones del gobierno de Morales y Linera con la propia base masista* y también con importantes sectores de los trabajadores, como los fabriles y docentes de La Paz. A comienzos de 2009 salieron también sectores de la minería privada, una categoría de trabajadores muy contradictoria y que mayormente hace parte también de la base social oficialista.

Después de la pelea contra el Gasolinazo, *la perspectiva para el 2011 es que esa tendencia al desborde por izquierda al gobierno del MAS se profundice.*

Sin embargo, todavía no se han abierto grandes fracturas en el seno del gobierno. La unificación de las luchas –salvo en los casos de explosión social– es muy fragmentaria. Y la actuación ultra oficialista de la COB sigue dificultando la pelea por la conformación de un polo de lucha a la izquierda del MAS.

Pero, fundamentalmente, *lo que sigue faltando es una alternativa de izquierda independiente al gobierno del MAS que contraponga al tímido reformismo de Morales y Linera la perspectiva de transformaciones auténticamente revolucionarias: una Bolivia socialista, obrera, campesina, originaria y popular.*

ENSAYO GENERAL SECESIONISTA

A mediados de 2008 se llegó a una cierta encrucijada en el proceso boliviano. Dos proyectos “normalizadores” llegaron a un pico máximo de confrontación: el reaccionario de la oligarquía del Oriente y el reformista de Morales y Linera. Se buscaba cerrar el proceso abierto con la Guerra del Agua en Cochabamba en el año 2000, pero por vías muy distintas que ponían en cuestión en cierta forma la unidad misma del país.

Para realizar los objetivos planteados había que sacar a la gente de las calles. Una vía –la que termina fracasando rotundamente– era hacer esto de manera frontal, ultrarreaccionaria, discurso regionalista y racista mediante. La otra, mucho más sutil, es dando *un rodeo reformista que satisficiera alguno de los reclamos de la población explotada y oprimida en el terreno puramente democrático-discursivo.*

Si bien esta salida es la que se impone por parte del oficialismo masista, este camino reformista no resulta sencillo en una Bolivia inmersa en conflictos económicos, políticos y regionales de largo alcance no resueltos por décadas. Estas contradicciones siguen presentes y son las que acaban de explotar en la pelea contra el Gasolinazo.

A mediados de 2008, el triunfo de Morales en el referéndum revocatorio de mandato del 10 de agosto le da al gobierno el aire que le faltaba. La oligarquía del Oriente (Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando), junto con algún sector de las otras ciudades capitales, pretendió llevar su descontento a las urnas. Pero esta

maniobra fracasó completamente y las elecciones le dieron un respiro al gobierno, que se alzó con el 67% de los votos por la no revocación del mandato.

Esto determinó que el MAS, con semejante elección, saliera rápidamente a convocar a un nuevo referéndum para aprobar la nueva Constitución Política del Estado (CPE), que hacía más de año y medio venía estancada por una quejalla de procedimientos. La derecha vio esta convocatoria como una provocación (más allá de los estrictos límites reformistas del proyecto constitucional del MAS), y respondió con *un levantamiento cuasi secesionista*.

Esto ocurrió a pesar de que el proyecto de nueva CPE no cambiaba, ni cambió luego de su aprobación, los rasgos más retrógrados de la economía basada en el libre mercado. *No se ha tocado una coma de la ley 21060, base fundamental del neoliberalismo en Bolivia* vigente desde el último gobierno de Paz Estenssoro de 1986, y que fue impuesta al costo de 30.000 despidos mineros. Aun así, la derecha la vio como una amenaza para sus intereses. Los cambios puramente simbólicos que conllevaba la nueva CPE parecían demasiado para los oligarcas fascistas que gobiernan el Oriente boliviano. En el fondo, una de las disputas más grandes se anudó y se sigue anudando alrededor del reparto de los recursos hidrocarburíferos entre los departamentos del país.

Parte del levantamiento en Santa Cruz embistió contra las oficinas nacionales de rentas de la ciudad, con la exigencia de que sea cada departamento el que cobre las regalías y luego gire un porcentaje al gobierno nacional. De haberse impuesto esa medida, hubiera sido prácticamente decretar el fin del Estado nacional, exigencia que se vino abajo con el fracaso del levantamiento.

Uno de los reclamos que tensionan permanentemente el escenario político nacional de Bolivia es el hecho que si el centro *político* del país sigue estando en el Altiplano, más precisamente en La Paz y El Alto, su centro *económico* se ha desplazado al Oriente, con un departamento como el de Santa Cruz que produce el 30% del PBI anual entre hidrocarburos y producción agroganadera. Estas diferencias económicas entre el Oriente y el Occidente determinaron muchas veces situaciones de conflictos en la historia de Bolivia.

LA DERROTA POLÍTICA DE LA OLIGARQUÍA DEL ORIENTE

El proceso de desafío a la autoridad del gobierno nacional que venimos analizando tuvo una serie de rasgos particulares. Uno de ellos es que se expresó no por intermedio de los partidos con representación parlamentaria sino por intermedio de los gobiernos departamentales. Porque el hecho es que los partidos tradicionales en Bolivia están en un marcado retroceso desde la crisis de octubre del 2003: el sistema de partidos quedó casi liquidado. Y es por ello que fueron los Comités Cívicos los que los sustituyeron en gran medida durante la crisis del 2008.

Hizo parte de esto mismo el carácter “movimientista” del proceso de la lucha y su organización mediante “Cabildos Abiertos”, llamando a grandes sectores de la población –en el caso de Santa Cruz, de las clases medias

urbanas movilizadas por motivos regionalistas reaccionarios- y ocupando así el espacio dejado por los partidos tradicionales de la derecha. Pero todo este proceso retrocedió marcadamente después de la derrota de 2008, aun a pesar de los intentos de reacomodarse en el levantamiento popular de finales de 2010.

A pesar de tanta batahola, los cambios constitucionales finalmente expresados en la nueva CPE no fueron como los denunció la oligarquía: se trató en esencia de *un muy tibio reformismo que otorga derechos democráticos a una población originaria cuyas condiciones estructurales de vida no son cambiadas en lo fundamental*. Sin embargo, incluso esto fue visto como una declaración de guerra. Al respecto, Pablo Stefanoni, un fiel seguidor del oficialismo, sostiene que el proyecto de Evo Morales “se vincula a *la modernización del país, la reposición del rol del Estado en la economía, la inclusión social y cultural de las mayorías indígenas y un reparto más democrático de la renta proveniente de los recursos naturales, fundamentalmente del gas*”. Y no mucho más, agregamos nosotros.

Son reformas que *no cambian en nada el carácter capitalista del país y ni siquiera implican la expulsión de las transnacionales imperialistas de los hidrocarburos*. Por no hablar de la minería y demás actividades extractivas o vinculadas a la explotación de la tierra y los recursos naturales, donde las grandes compañías extranjeras han sido beneficiadas, como la multinacional india Jindal, con el yacimiento de El Mutún.

La nueva CPE no ha cambiado en nada la relación económica de explotación a la que está sometida la población trabajadora; el pobre seguirá siendo pobre aunque le den bonos de todo tipo. Y sin embargo, esto da pie a la reacción conservadora de la derecha, que no quiere dar ninguna concesión por mínima que sea.

Esta realidad es la que terminó desencadenando una serie de movilizaciones y protestas en contra de la nueva Constitución. La readecuación del reparto de las regalías fue el punto fundamental para la contienda, que llevó a acciones de hecho: la toma de edificios públicos y los aeropuertos del Oriente en agosto de 2008 daba cuenta de una inestabilidad que podía tener repercusiones en la región; era imperioso ponerle un freno.

El proceso de secesión llegó a su punto culminante con la bárbara matanza de campesinos en septiembre de 2008 en el departamento de Pando a manos del ex prefecto –hoy preso sin juicio– Leopoldo Fernández.

El ensayo general de separación había llegado demasiado lejos. Los grupos más radicales quedaron despegados de las bases: una cosa era estar con el “discurso” y otra muy distinta andar matando campesinos y poniendo en peligro la unidad nacional del país. Ahí es donde *la derecha reaccionaria se queda sin base social* para sostener la arremetida.

Al mismo tiempo, es demasiado para unas bases sociales hasta entonces contenidas por el gobierno. Se da la incorporación de miles y miles de campesinos, varios de ellos armados, para vengar las muertes de Pando. Pero el

gobierno masista pudo frenar a tiempo esa masiva respuesta; la consecuencia de una respuesta popular potencialmente revolucionaria habría sido una *desestabilización sin precedentes en la región*. Basta imaginar el potencial explosivo de un escenario de casi *guerra civil* en el país andino.

Por eso mismo, los gobiernos de la región hicieron todo lo posible, brindándole todo su apoyo al gobierno del MAS, para que ese enfrentamiento *no se concrete*. La salida: un pacto que concede una “tregua” sin culpar a nadie por los acontecimientos.

El gobierno sale victorioso, pero con sus propios métodos burgueses: derrotando pero no aplastando a los sediciosos, como estaba realmente planteado. Linera mentía conscientemente cuando afirmó: “En septiembre de 2008 se da la *victoria militar del pueblo* sobre las fuerzas conservadoras de derecha y golpistas. A la victoria electoral se suma la victoria de la movilización social militar, que será completada con una victoria de carácter político”. Porque, justamente, lo que hizo el gobierno del MAS, en conjunto con los gobiernos de la región, fue evitar que ese choque y “victoria militar” se efectivizara, lo que hubiera radicalizado toda la situación política en Bolivia y amenazado con desbordar al oficialismo.

Luego de la derrota del levantamiento secesionista, para terminar de aprobar la nueva Constitución en el Congreso, que venía largamente dilatada y que por las movidas de la derecha el MAS no podía terminar de resolver, se realiza en octubre de 2008 una marcha que dura más de una semana, con los movimientos sociales de todo el país. Esto le da el contenido popular que le faltaba a la aprobación de la Constituyente. Cuando concluye la marcha en la Plaza Murillo (donde se sitúan el Congreso y la Casa de Gobierno), parecía como si la población de los cuatro puntos cardinales de Bolivia hubiera elaborado esa Constitución en cuya defensa marcharon. He aquí el elemento simbólico con que el gobierno jugó constantemente.

La oligarquía más radical había perdido prácticamente todo su espacio, tras la derrota de un intento secesionista sin dirección clara que encaminara sus acciones. El gobierno ganaba más y más terreno desde los medios. Muchos de los referentes de la oligarquía caen presos por los actos sediciosos cometidos. De ahí en más, la derecha se queda sin discurso y hasta hoy carece de representantes de peso. Si bien sigue administrando un sector económicamente clave del país, la burguesía ve que los cambios no son como se dice en los medios y *comienza a hacer negocios con el gobierno*. Los partidos de la reacción pierden así su base más importante.

EL REALINEAMIENTO BURGUÉS HACIA EL GOBIERNO

El proceso abierto en el 2000 tuvo su pico en el Octubre de 2003. El aparente cumplimiento de la agenda de Octubre, que pedía la nacionalización de los hidrocarburos y la puesta en marcha de una Asamblea Constituyente, parece cerrar formalmente el proceso.

Pero la definición es precisamente ésta: parece hacerlo pero sólo formalmente, porque aquí el operativo del gobierno masista fue en gran medida *un basteo de las demandas populares más que su cumplimiento cabal* (como se ha revelado ahora en la crisis por el precio de los hidrocarburos). Por otra parte, el propio Gasolinazo ha demostrado que *la relación de fuerzas establecidas desde 2003 sigue presente*, si bien hasta diciembre último sus aspectos más radicales parecían reabsorbidos y el gobierno del MAS venía administrando esa relación de fuerzas.

Veamos esto un poco más de cerca. Con la actividad extractiva en manos de los concesionarios privados, la nacionalización fue más bien la adecuación de los contratos y la compra de acciones de las empresas de transporte y refinación de hidrocarburos dedicados al consumo en el mercado interno. Con esto le alcanzó al gobierno de Morales para presentar como “cumplida” esta tarea... Sin embargo, esto es completamente falso: con el actual gobierno las transnacionales permanecen y explotan gas y petróleo a su antojo. Volveremos sobre esto más abajo.

El otro punto era la nueva CPE. El reclamo por una nueva Asamblea Constituyente venía desde los años 90 por pobladores de las tierras bajas del país. Pero la CPE del gobierno masista respondió sólo formalmente a esta demanda: la Constituyente no fue realmente *soberana* sino *pactada*. Terminó aprobando un texto que no interfiere en la propiedad privada ni da beneficios a la población en lo económico. Solamente es un cambio de algunas formas en lo que hace a los *mecanismos de representación comunal o municipal*, como es el tema simbólico indígena que, aun con el resentimiento de algunas regiones, todos están aceptando.

Producto del carácter en el fondo *formal* de las reformas introducidas por la nueva CPE, la burguesía comienza a cambiar su actitud frente al gobierno. Esto hace que la oligarquía del Oriente pierda parte de su base. Por ejemplo, hoy en día los bancos son grandes beneficiarios de la política económica del gobierno: no se han quejado nunca, y esto en una coyuntura mundial de gran crisis económica. Parte de esta realidad es el hecho de que en Bolivia –como en la mayoría de los países de la región– la crisis pasó por arriba sin tocar los sectores más dinámicos de la economía nacional... hasta que la cosa reventó en diciembre por la vía inflacionaria del aumento general de los precios vía suba de la gasolina, como veremos más abajo.

En definitiva, lo importante es señalar que *la burguesía se readecuó a un nuevo esquema político-económico con una levemente mayor intervención estatal* para seguir teniendo sus jugosas ganancias. Porque la nueva CPE mantuvo en los hechos la vigencia del decreto supremo 21060, que delineó la nueva política económica ultra neoliberal del país a partir de 1985.

A partir de 2009, entonces, hay *un evidente cambio en la situación política* del país. Los conflictos casi desaparecieron ese año. Solamente quedó la baja de los minerales por varios meses debido a la crisis económica, pero luego retornan a valores bastantes altos que se mantienen hasta hoy.

El gobierno gana terreno en el ámbito político en Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija. Incluso se llega al extremo de que *el brazo armado de la reacción cruceña se pasa a las filas del MAS*. La famosa Unión Juvenil Cruceñista, que meses antes golpeaba a campesinos y mujeres de pollera (cholas) en la plaza principal de Santa Cruz, ahora pasa a apoyar el “proceso de cambio”... La explicación de fondo, más allá de la idiosincrasia volátil de la política boliviana o el carácter más formal que real de las reformas del gobierno del MAS, es que la tradición del país hace que todo sea moneda de cambio al servicio de objetivos más estrechos que los proclamados. Se trató de un pacto de impunidad: ¡si la UJC se pasaba a las filas del MAS, no se les seguiría juicio por los hechos criminales cometidos en septiembre de 2008!

En este escenario, la derecha quedó prácticamente sin elementos para disputar con el gobierno el espacio regional, aunque conserva una cuota de poder político a través de las gobernaciones. Pero por ahora muy limitada y sin proyección nacional.

Por otra parte, el gobierno hizo notar que lo de “socialismo” se queda solamente en palabras para los medios de comunicación. *Nada cambia respecto de las libertades económicas y financieras*, que era lo que más le preocupaba a la burguesía. Los pactos dan sus frutos y la derecha se conforma con lo que tiene.

El vicepresidente Linera embellece el panorama cuando señala: “Necesitamos la Constituyente para construir el nuevo Estado, para anclar en las instituciones y relaciones de mando duraderas del Estado la nueva correlación de fuerzas alcanzadas por el movimiento indígena-popular en el ciclo de movilizaciones de 2000-2005. Una Constitución lo que hace es solidificar una serie de *puntos de apoyo irreversibles*, de conquistas y mandos alcanzados históricamente por la trama de la luchas de poder de una sociedad” (*Le Monde diplomatique* 17).

La realidad es muy distinta: *ninguna de las principales reivindicaciones planteadas por la agenda de Octubre fue realmente satisfecha*. La nueva CPE quedó por detrás de la relación de fuerzas existentes y, además, más allá de cambios cosméticos, no hay ninguna transformación de fondo, y menos “irreversible”.

Las masas populares solamente fueron convocadas para presionar por la aprobación de la nueva CPE sin conocer realmente el texto. Éste nunca fue puesto en discusión con la población que combatió en las jornadas de octubre de 2003, que apuntaban a ir más allá de la raquíta Bolivia capitalista semicolonial que tenemos hoy y que el gobierno del MAS vino a relegitimar, pequeñas reformas mediante.

Como producto de la derrota de la oligarquía, durante 2009 el gobierno se dedicó a organizar un verdadero festival de elecciones, de las que sale ratificado y legitimado. Los conflictos se reducen sensiblemente. Reelecto Morales con el 64% de los votos en diciembre de ese año, reasume en enero de 2010 con gran pompa. Todo hacía presumir que en las elecciones municipales del 4 de mayo de ese año el gobierno se alzaría con un nuevo triunfo electoral, pero los resultados fueron mucho más contradictorios. A lo largo del año

pasado se comenzó a procesar un cambio que terminó en el desborde, ahora por la izquierda, al gobierno masista en diciembre último. Antes de abocarnos a los acontecimientos de 2010, veamos someramente la situación de la economía.

EL TRABAJO DE ZAPA DE LA INFLACIÓN

Hasta diciembre pasado parecía que la economía de Bolivia no terminaba de reflejar lo que está pasando en el mundo. Como ocurre con otros países de la región, el precio de las materias primas se recuperó rápidamente, a lo que se agrega que el contexto económico regional es favorable. Así las cosas, Bolivia se venía manteniendo hasta cierto punto alejada de lo que pasa en Europa o Estados Unidos. Inclusive, *Bolivia está viviendo una suerte de repunte económico que no se veía desde mediados de la década del 90*, con el límite de las presiones inflacionarias.

Pongamos antes en su contexto la “bonanza” pregonada por el gobierno masista. En Bolivia hay hoy unos 3,4 millones de personas desnutridas sobre una población total de 10 millones. Para paliar esto, el gobierno puso en práctica un instrumento que solamente remedia el hambre del día: los bonos (siguiendo el ejemplo de Lula en Brasil). Nos remitimos a un extracto de *Le Monde Diplomatique* de febrero de 2009: “Para no convertir [el país] en el círculo vicioso de la improductividad crónica, no debe quedar duda de que el pago de la Renta Dignidad, del Juancito Pinto y cualquier otra forma de transferencia de renta que se dirija a aliviar la pobreza y el hambre de los bolivianos es una obligación del Estado”. La Renta Dignidad es un bono de 200 pesos bolivianos al mes, menos de 30 dólares, y el bono Juancito Pinto se entrega a estudiantes de colegio (200 bolivianos por año para garantizar el cumplimiento del ciclo escolar). “Pero –continúa el texto– no sólo de bonos vive un pueblo; se requiere trabajo y capital productivo. Trabajo que genere salario real digno, capital que ensanche la base económica de Bolivia”.

Esto es precisamente a lo que *no* apunta la política económica del MAS, que consiste en dar bonos para contentar a la gente mientras las ganancias se dirigen al extranjero. Hay paliativos, pero la nueva Constitución no garantiza el trabajo de los ciudadanos ni una vida digna, como le gusta decir al oficialismo. *El “buen vivir” sólo es de pocos: la mayoría del pueblo tiene que salir a luchar cada día por condiciones de vida algo más dignas.*

En los tres últimos años, el PBI ha crecido un promedio del 5%. Hoy no se tiene la seguridad de seguir con este ritmo, pero no se presentaban incrementos de esta magnitud desde una década atrás. Por otra parte, “la *deuda externa como porcentaje del PBI* llegó a representar el 83%. En 2003, se ubica en el 62%. Luego irá en caída vertical hasta que, en 2006, desciende a menos de una cuarta parte del PBI, y en 2008 ya alcanza tan sólo el 13,8%, gracias en gran medida a la condonación a los países pobres altamente endeudados (HPIC)” (*Le Monde diplomatique* 11)

Esto es parte de lo que el gobierno festeja como el “buen vivir”, más allá de la continuidad del dramático problema de la informalidad laboral y el desempleo. El CEDLA (Centro de Estudios de Desarrollo Laboral y Agrario) indica que en Bolivia hay un 11 % de desocupados, sin contar el empleo informal, que es generalizado.

En condiciones de alta informalidad y desempleo, y cuando la inflación golpea cada vez más a los sectores populares, por no hablar de lo que hubiera ocurrido si el Gasolinazo se hubiera aplicando en toda la línea, se vivió en el país a lo largo de 2010 la incorporación a la lucha de diversos sectores sociales en reclamos por mejores condiciones de vida. Al parecer, ya no se cree demasiado en el discurso oficial de que la economía está en “bonanza”. Claro que los ministros salen a decir que si aumentan más del 5% los salarios “habrá inflación”...

Durante todo 2010 se argumentó esto, y sin embargo la inflación no solamente siguió creciendo, sino que dio un salto aun pese a la retirada del Gasolinazo. Los explotados y oprimidos han oído una y mil veces que la economía está en “progreso”, pero conseguir un trabajo digno es casi una misión imposible. Mientras tanto, el gobierno sigue pidiendo “paciencia” para la industrialización, que demorará “más años en realizarse”.

En este contexto, 2009 fue un año de cierta estabilidad pero con un repunte económico que no llegó a la población. Ésta fue la base material de las protestas en 2010: una economía en ascenso mientras la gente sigue sufriendo la falta de trabajo y el hambre en todos los rincones del país. A esto se sumó la escalada inflacionaria producto del pretendido Gasolinazo del gobierno. Era demasiado. La situación debía estallar y estalló.

Después de aprobarse la nueva Constitución, la población trabajadora esperaba cambios sustanciales en su forma de vida. Pero esto no llegó: sólo fueron discursos de que “el socialismo vendrá dentro de 30 ó 40 años”. *Este desengaño también contribuyó a la rebelión social de diciembre pasado.*

LAS PROMESAS Y LA REALIDAD

Pasado 2009, cuando el MAS no terminaba de digerir su euforia por la reelección de Morales, de repente el escenario de 2010 parece dar una vuelta de campana: emerge *una creciente conflictividad, coronada con las jornadas de diciembre contra el Gasolinazo.*

Fue un año de conflictos. Pero no como los que veníamos viendo, en los que la derecha reaccionaria ponía la agenda y el gobierno terminaba pactando alguna salida para que la sangre no llegara al río. Esta vez *las protestas estuvieron encabezadas por sectores que hasta ese entonces eran afines al gobierno.*

Veamos primero una de las razones, más allá de la economía, por la cual sectores cercanos al oficialismo comienzan a plantear críticas al “proceso de cambio”. Principalmente, se trata de los discursos realizados a comienzos del año referidos a que Bolivia “entraba al socialismo”. El oficialismo pensaba

capitalizar lo que venía construyendo. Algunos analistas se impresionaron anunciando “un giro a la izquierda” que no fue tal. Se trataba solamente de una estrategia de seguir confundiendo a la población trabajadora, dejándole la esperanza que algún día, no se sabe cuándo, llegaría el socialismo. Junto con esto se determina el “Estado Plurinacional”; una especie de Estado en transición o transformación a formas distintas de gobierno, que no representa más que una readequación del poder en algunas regiones del país sin perder la esencia del estado centralista.

Pero las palabras tienen consecuencias, y más si vienen de parte de un gobierno autoproclamado del “cambio”: la frustración de estas expectativas es un elemento de peso detrás de la creciente conflictividad social en 2010.

Esta combinación de elementos simbólicos originarios, izar la Wipala (bandera de la nación originaria) o decir que las Fuerzas Armadas desde ahora son “anticapitalistas” y “socialistas” solamente refuerza que las cosas “cambian” sin cambiar realmente mucho del capitalismo boliviano. Esto va a expresarse muy sencillamente en que, por ejemplo, *todavía se sigue viviendo bajo leyes del neoliberalismo*.

Por supuesto que este Estado “socialista” no sería producto de la lucha de clases, la expropiación al capital ni nada parecido; todo se desarrollaría a través de las esferas de las instituciones del Estado. Pero de ningún modo se puede creer que los cambios sustanciales de la sociedad provengan del Estado burgués. Sin lucha en las calles, la clase obrera no puede salir de la opresión del capital. Y con esto juega el gobierno del MAS: ellos serían *los salvadores de la explotación sin expropiar a un solo capitalista*.

2010 es el año, entonces, en que las mentiras empiezan a quedar en evidencia. La población explotada se impacienta porque los cambios nunca lleguen. Se habla de “socialismo”, de que la economía está “muy bien”, pero los trabajadores siguen sin trabajo, sumado a que la inflación deteriora día a día los magros sueldos que el gobierno se niega a aumentar.

Un punto de inflexión viene a partir las elecciones del 4 de abril. Se suponía que el partido de gobierno arrasaría y pasaría a ser totalmente hegemónico. Pero la realidad fue muy distinta: la población laboriosa no le dio al gobierno el cheque en blanco que deseaba. Principalmente, fue la población de las ciudades la que le quitó el voto al MAS, perdiendo varias alcaldías de importancia. Más allá de esto, por abajo sigue el descontento: *desde las propias bases del MAS se sale a pelear por mejores condiciones de vida*.

Uno de los factores que influyeron en esta baja en el electorado es que el MAS implementó para las elecciones mecanismos propios de los antiguos partidos tradicionales, poniendo candidatos elegidos a dedo desde el Ejecutivo. Haber dado la espalda a los candidatos propuestos por las organizaciones sociales le quitó apoyo al gobierno, llevándolo en muchos lados a la derrota. El mismo Evo Morales, haciendo campaña, más de una vez fue tratado de mala manera cuando iba a algún lugar donde se habían cometido estos actos burocráticos de desconocer lo que las organizaciones decidían.

El gobierno no supo ver ni prever nada. La baja del 10% del electorado en menos de cuatro meses era significativa. En varias regiones del país, bastiones masistas hasta el día anterior, las derrotas fueron contundentes. Se empieza a resquebrajar así la supuesta hegemonía que pretendía tener el Gobierno. De allí en más se desencadenan protestas, huelgas y bloqueos en la región occidental del país, que hasta este entonces se mantenía fiel al gobierno.

LA CLASE OBRERA AMENAZA CON ENTRAR EN ESCENA

Luego de las elecciones, estalla una ola de protestas en varios lugares del país. El reclamo de aumentos salariales y la pelea por la modificación de leyes que cortan la libertad sindical a los trabajadores, junto con la ley de pensiones que se viene discutiendo desde tiempo antes, son el detonante para que la clase obrera saliera a las calles.

En este contexto, se produce la primera huelga general que sufre el gobierno masista en sus cinco años de gobierno. Los fabriles y el magisterio salieron a las calles por los temas mencionados. Desde estas luchas se sintió con más fuerza el descontento hacia el propio gobierno. Antes se echaba la culpa a los ministros corruptos, pero ahora *las protestas van cada vez con más fuerza contra Evo Morales y Álvaro García Linera*.

El aumento salarial propuesto del 5% es irrisorio para una economía empobrecida desde hace décadas y, para colmo, con crecientes tendencias inflacionarias. La respuesta del gobierno se parece a la de los gobiernos neoliberales de la década de los 90, que argumentaban que un aumento por encima del 5% desataría una inflación "incontrolable". Este 5% representaba en el sueldo de un trabajador la cifra de 32 bolivianos; una absoluta burla de parte del gobierno. Una de las respuestas más vergonzosas la dio el viceministro de Trabajo, Gustavo Torrico, hoy fuera del MAS por actos de "corrupción interna". Parafraseando a María Antonieta, lanzó: "Si no les alcanza la plata, que coman pan con café". Estas son las palabras del gobierno cuando habla del "buen vivir" o de su proceso hacia el "socialismo". Al desempolvillar las viejas y cuestionadas recetas del Fondo Monetario Internacional, "el gobierno ha demostrado que el 'socialismo comunitario' tiene poderosos argumentos de imagen –ondear la Wipala y cosas así– pero muy poco para ofrecer a los que se llevan la mano en el bolsillo" (*Pulso*, 9-15 de mayo de 2010).

Mientras se niegan aumentos a los trabajadores, se realizan gastos en armamento militar o compra de aviones, cuando el país no está en condiciones de darse esos lujos. Junto con esto, la burocracia de la COB juega a favor del gobierno, *imponiendo medidas para dividir y no masificar la lucha*.

Ya hace tiempo se venía viendo cómo la Central Obrera Boliviana tenía una política contraria a los trabajadores. Por ejemplo, apoyando la nueva Ley de Trabajo, que escandalosamente corta libertades básicas como los fueros sindicales. De manera antagónica con la tradición clasista con la que se fundó la central medio siglo atrás, el ejecutivo de la COB dice lo siguiente:

“Queremos *trabajar mancomunadamente trabajadores y empresarios*, porque en el pasado se hacían los proyectos sólo entre tres personas que decidían la suerte de los bolivianos. Esta socialización es una señal para otros países, para que conozcan que Bolivia vive un cambio de verdad y que está unida más que nunca”. El hecho es que *la COB ha vendido su independencia frente al gobierno* de frente popular con el objetivo de obtener no se sabe qué beneficios a la sombra del poder. La sumisión completa de la COB era el eslabón que le faltaba al MAS para completar la cooptación de las organizaciones de masas, ya que la central obrera, por más debilitada que viniera en los últimos años, sigue siendo un punto de referencia de importancia para amplios sectores explotados y oprimidos.

Como prenda de este alineamiento con el oficialismo, la dirección de la COB encabezada por Pedro Montes convocó a una pretendida “huelga general por tiempo indeterminado” en los primeros meses de 2010, solamente para que ante el maximalismo de la convocatoria la huelga no se llevara a cabo. Se dejó así en el aislamiento a la lucha de los fabriles de La Paz (una de las más importantes huelgas obreras en los últimos años) y del magisterio por un acuerdo que beneficiaba solamente al sector minero en la reducción de la edad jubilatoria. Esto no ocurrió sin un costo político entre amplios sectores de la base: el “Montes, cabrón, te espera el paredón” podría hacer más dificultosa la reubicación de esta dirigencia si el ambiente se sigue calentando en Bolivia, como parece ser la tendencia de las primeras semanas de 2011.

DE CARANAVI A POTOSÍ PASANDO POR EL ORIENTE

Uno de los acontecimientos más significativos de 2010 fue lo sucedido en Caranavi. Como segundo bastión del MAS en el país, y sólo 15 días después de las elecciones municipales del 4 de mayo, el pueblo se levanta presionando al “gobierno popular” para que concrete lo prometido dos años atrás. La medida tomada fue el bloqueo de caminos de toda la región, medida en que se entremezcla la disputa interna de dos grupos afines al oficialismo.

Se trata del segundo conflicto de 2010 que estalla desde las bases. La falta de trabajo y las mejoras económicas que nunca llegan hacen salir a las calles a la población. Es un enfrentamiento donde la mayoría de los participantes son jóvenes; de ahí que ninguno de los muertos pasara de los 20 años.

La exigencia concreta de la poblada era la instalación de una planta procesadora de cítricos. Había una disputa acerca de si se instalaría en esa ciudad o en Palos Blancos. Además, se reclamaba el asfalto en la carretera Santa Bárbara-Caranavi, que el instituto terciario se elevara al rango de universidad y la provisión de agua potable las veinticuatro horas.

El gobierno del “cambio”, a través de los ministros Sacha Llorenti y el vicedirector Gustavo Torrico, fue el que organizó la intervención policial, con *un saldo de dos muertos, Mario Hernani y David Calizaza, y más de veinte heridos*. También hubo allanamientos ilegales en La Paz por parte de la policía. La

política de Morales-Linera en este caso, como en Potosí, fue acusar a los dirigentes o la población de ser “agentes del imperialismo”, calumnia que corrió por cuenta del propio Evo Morales.

Toda persona o grupo que saca los pies del plato es acusado de ser “financiado por agentes de Estados Unidos”. Hasta se llegó a decir que había “grupos guerrilleros” actuando en la zona; una mentira total, típico de gobiernos reformistas que juegan al chantaje de que cualquier lucha popular que muy justamente los desborda por izquierda, ante sus límites de gobierno capitalista, es “agente de la derecha”. Uno de los representantes de este movimiento popular llega a denunciar que “los dirigentes están en la clandestinidad y los teléfonos están intervenidos. Todo esto es una dictadura, nunca pensamos que el segundo bastión del MAS iba a quedar de esta manera”.

Otro de los conflictos de 2010 provino de un sector originario que rechaza la política del gobierno sin estar del lado de la derecha. La marcha de este sector empezó en el Oriente, desde la localidad de Trinidad (Beni). La movilización es encabezada por la Confederación Indígena del Oriente Boliviano, y tuvo la intención de llegar a La Paz para presionar por una mayor autonomía indígena. Porque la Ley Marco de Autonomías no garantizaba la autogestión de las poblaciones que integran estos territorios. La riqueza, como siempre, se la terminan llevando otros. Y el gobierno del MAS defendió esta política. Nuevamente el MAS sale con mentiras y calumnias, en este caso atacando a una organización reconocida como la CIDOB por estar, supuestamente, “financiada por la oligarquía”. Morales afirmó muy suelto de cuerpo que la marcha era un “mamarracho”. Luego, el ministro de Autonomías, Carlos Romero, agregó calumnias de su propia cosecha al denunciar que la marcha estaba “financiada por USAID”, ONG que trabaja en Latinoamérica desde los años 60 con el sostén de Estados Unidos, y expulsada de varios lugares de Bolivia por intromisión en las políticas sociales.

El pliego petitorio de la CIDOB incluía que los trabajos de exploración o explotación de tierras que pertenecieran a las autonomías indígenas fueran tratados por los propios pobladores de la región. El gobierno salió a una campaña despiadada para que la marcha no llegara a La Paz. Jugó a la división, pactando y negociando por separado con otros sectores que se querían sumar a la protesta a lo largo de su recorrido. En cada caso actuó de rompehuelgas, buscando deslegitimar a los sectores en lucha con las acusaciones más descabelladas.

Por último, el conflicto desatado en Potosí terminó inclinando la balanza del creciente descontento popular. Las cosas en este departamento fueron más lejos que en conflictos anteriores, no sólo por las peticiones sino por la cantidad de gente que se movilizó, las masivas huelgas de hambre y la cerrada negativa del gobierno a ceder en lo más mínimo.

El conflicto duró más de veinte días y tuvo un amplio impacto nacional, con más de 2.000 huelguistas de hambre. No sólo en Potosí, sino en La Paz había piquetes de huelga. Todo empezó como una disputa por un problema de límites que data de la época de la colonia, pero la cuestión de fondo estuvo vincu-

lada al problema del empleo: la disputa por la pertenencia al departamento de una mina de piedra caliza. En medio de un mar de carencias económicas, la vida política de Bolivia siempre ha estado marcada por la pelea de las regiones por el reparto de los recursos. El departamento estuvo totalmente bloqueado, escasearon los suministros básicos, pero la población no cedió hasta conseguir lo que pedía. La paradoja de este conflicto es que el departamento de Potosí fue donde el gobierno obtuvo más votos en las elecciones municipales, con un 80% del electorado a favor del “proceso de cambio”. El MAS ganó 34 de los 40 municipios del departamento.

Veamos más de cerca los reclamos. El primero será el de los límites entre los ayllus indígenas de Coroma en Potosí y Quillacas en Oruro. Como ya hemos señalado, la disputa no era solamente territorial: se reclamaba el yacimiento de piedra caliza, empleada en la fabricación de cemento. También se pide la instalación de una fábrica de cemento, la puesta en marcha de un complejo minero llamado Karachipampa y la construcción de un aeropuerto internacional para el departamento. Éstas fueron las consignas en un primer momento. Pasados los días, y cuando la bronca empezó a escalar, se planteó una exigencia más radicalizada: la nacionalización del megaproyecto minero de San Cristóbal.

El gobierno siguió con su política provocadora de denunciar a lo sectores en lucha. Sin embargo, ningún ministro se animaba a pisar suelo potosino por miedo a ser linchado. El mismo presidente Evo Morales llegó a pedir “un lugar neutral” –Sucre o Cochabamba– para llevar a cabo una negociación, y finalmente cede a varios de los reclamos populares.

LA REBELIÓN POPULAR CONTRA EL GASOLINAZO

Es en el panorama anterior que el gobierno ensaya hacia fines de año una maniobra distractiva buscando desempolvar la polarización con la derecha. La excusa es la llamada “ley contra el racismo”, promulgada en octubre de 2010 y que por unas semanas logra correr el eje de los reclamos. Sin embargo, para diciembre las cosas vuelven a su lugar: *con el Gasolinazo pega un salto cualitativo el cuestionamiento al “gobierno popular”*.

Luego de un año en que la presión de los reclamos venía en línea ascendente, Morales se ve enfrentado a una irrupción popular de enormes proporciones, sin precedentes desde mayo-junio de 2005.

El gobierno saca el Decreto Supremo 748 el 26 de diciembre, estableciendo un aumento en el precio de la gasolina de un 73% y del diésel del 83%. A los tres días tiene que salir a dar explicaciones porque el país se empezaba a incendiar. Sin embargo, trata de mantener los aumentos con una serie de “correcciones”. Pero el 31 de diciembre, una hora antes de terminar el año, y ante una rebelión popular que no para, *Morales se ve obligado a retroceder, derogando el decreto ante el peligro de que el país empiece a ser ingobernable*.

2010 se cerraba como se preanunció desde un comienzo: el gobierno empieza a tener que vérselas con el movimiento de masas abriendo *una nueva situación política de más inestabilidad*.

El decreto se emite con la justificación de que serviría “para combatir el contrabando y equiparar los precios nacionales con los internacionales”. Pero, ¿desde cuándo el criterio debe ser la equiparación de los precios cuando esto implica aumentar de manera sideral un servicio esencial? Se hace evidente que la supuesta “nacionalización” de los hidrocarburos fue una suerte de fiasco político. El precio del barril del petróleo que paga el Estado a las transnacionales sería demasiado “bajo”, según éstas. Con ese precio, las empresas se quedarían “sin ganancias”; tal es la “justificación” por la que no han invertido un boliviano en estos años... Se quejan porque el precio del barril de petróleo sería “demasiado bajo” (para el mercado interno, su precio de venta es de 27 dólares, muy inferior al del mercado internacional). Pero he aquí que el gobierno venía *subsidiando a las empresas* parte de la diferencia entre ese precio interno y el internacional. Y la realidad es que el gobierno pretendió con el Gasolinazo eliminar todo o parte de ese subsidio y trasladárselo al bolsillo popular, siempre en beneficio de las empresas petroleras capitalistas. El decreto buscaba elevar el precio del barril a 59 dólares: ¡un alza de más del 100 por ciento!

En Bolivia hace más de diez años que el combustible está subvencionado por el Estado: son 380 millones de dólares que se sacan de las ganancias del gas y se transfieren al combustible líquido. Ningún gobierno se había animado a tocar esta subvención. Pero parece que el “gobierno popular” del MAS boliviano estaba y sigue estando decidido a terminar con este beneficio.

La justificación del gobierno para el intento de aumento fue un nuevo engaño a la población trabajadora. Al respecto, el vicepresidente de la Nación, Álvaro García Linera, argumentó que “se ha evidenciado que la demanda creciente de carburantes en el mercado interno responde a actividades de contrabando que buscan obtener beneficios ilegítimos con el transporte, distribución y comercialización de estos productos fuera de las fronteras del país”. Por supuesto, esto es una gran mentira: si bien la administración es incapaz de custodiar las fronteras, de ningún modo es justificativo el contrabando para descargar un brutal aumento de los precios sobre la población explotada. La realidad fue otra: *se pretendió conformar a las multinacionales sobre la espalda del obrero, el docente, el gremial y el campesino*.

El ministro de Economía, Luis Arce, lo dijo con total claridad: “En adelante, el precio de los combustibles estará indexado al precio internacional del petróleo. Antes del incremento, el barril costaba 27 dólares para el consumo interno, y con ese precio las empresas no tenían incentivos para aumentar la producción de líquidos, que es deficitaria” (*El Nuevo Herald*, 28-12-10).

El economista Armando Méndez explicaba: “Morales ha defendido con absoluta claridad la razón por la que tomó esa drástica medida: si no se tomaba, el país no habría podido producir líquidos porque el precio de 27 dólares

no convenía a las petroleras y Bolivia estaba condenada a no producir" (*La Prensa*, 30-12-10). El motivo del aumento era claro: *hacer rentable la extracción de petróleo para las empresas trasnacionales*.

Cabe la pregunta: ¿de qué sirvió la "nacionalización" del gas si las mismas petroleras extranjeras le exigen al Gobierno que aumente sus ganancias? A estas empresas "ya no les servía seguir trabajando en el país". Era "imperativo" elevar los precios para que ellos "ganen lo suficiente". El "gobierno popular" intentó hacer lo que todo gobierno capitalista: que los trabajadores y consumidores paguen las superganancias de las empresas. El analista económico Julio Alvarado dijo con razón: "Aquí las más beneficiadas son aquellas empresas vili-pendiadas en estos cinco años. Las trasnacionales petroleras aumentaron sus ganancias en más del 100%".

"ASÍ COMO LO SUBIMOS LO PODEMOS BAJAR"

"La política de hidrocarburos es un fracaso, porque ha sido mal ejecutada y, obviamente, YPF ha sido mal administrada. Esto se cae de maduro y ahora todo el mundo lo puede ver de manera nítida; todo fue discurso y demagogia" (Rubén Costas, gobernador de Santa Cruz, *La Prensa*, 4-1-11).

Tres días después de que se anunciara el draconiano decreto, el país explotaba. El gobierno trata de salir a explicar lo inexplicable: por qué una medida tan impopular tendría que ser aceptada. El propio Evo Morales anuncia que "no se retrocedería en las medidas". Y sube la apuesta: "Soy responsable con Bolivia; de que esa plata, en vez de que se vaya, se quede aquí (...) Esto no es 'gasolinazo', es como nivelar los precios de los combustibles" (*La Prensa*, 30-12-10).

Para tratar de ganar tiempo, el gobierno anuncia "paliativos". Estas medidas fueron puestas para frenar a los sectores que podían ser más conflictivos. Por otra parte, buscan tener asegurada a la policía vía un aumento del 20% a las fuerzas de seguridad. Esto garantizaba que seguirían estando de parte del gobierno si las cosas se ponían más complicadas. Se aumentó el mismo porcentaje al magisterio y a los trabajadores de la salud, dos sectores con capacidad de movilización y que suelen arrastrar a otros. Y, no casualmente, fueron los primeros en salir a las calles; el magisterio, ya el lunes 27 de diciembre, un día después del decreto. Esto desencadenó una ola de manifestaciones de otros sectores.

También se buscó beneficiar al sector campesino, una de las bases sociales principales del oficialismo. Con el dinero que se ahorra el gobierno en la subvención de los combustibles, pagaría "planes de riego" para el campo. Para los pequeños productores, compraría soja al precio internacional. También prometió comprar arroz, trigo y maíz a un 10% más del precio de mercado. Finalmente, anunció para los comerciantes o gremiales un aumento a los bonos sociales. Se trataba de migajas en las que la población no creyó: el aumento era demasiado brutal como para ser compensado con bonos y demás "paliativos".

El intento de controlar el país no duró mucho tiempo: al otro día (27 de diciembre), el país se paralizaba. El Gasolinazo era muy unificador: a todo el mundo le afectaba, ya que *los precios habían aumentado de un 30 a un 60%*.

Hubo rumores de corridas bancarias. El murmullo de un “corralito” de los depósitos se hizo sentir como en Argentina 2001. Los bancos fueron desbordados por miles de personas que querían sacar sus depósitos. Unos 200 millones de dólares se fueron de las entidades bancarias. La indignación no paraba de crecer y se hacía sentir la escasez de alimentos. La empresa del Estado ocupada de los alimentos, EMAPA, aumenta el arroz, el azúcar y la harina. La gente debía hacer horas de cola para conseguir esos productos. *Los fantasmas de la época de la UDP se hicieron sentir en la población.*

Las figuras de la derecha vuelven a aparecer. En La Paz es donde se siente con más fuerza que el gobierno pierde apoyo. No es la misma situación que hace 3 ó 4 años, cuando la ciudad de El Alto le daba el 80% de los votos. Las cosas habían cambiado. La derecha buscó recuperar un espacio que hace tiempo no tiene; el oportunismo más burdo se vio en el MIR y el MNR. Sus nefastos representantes siempre intentan meterse en el movimiento, pero de tan desprestigiados nadie les hace caso. Juan del Granado, junto con Revilla, alcalde de La Paz, con el Movimiento Sin Miedo, sí tienen bases sociales, específicamente de la clase media urbana. Si bien sus políticas no difieren mucho de las del MAS, en esta oportunidad trataron de ponerse de parte de la población y llevar agua a su molino, aunque no hace mucho el MSM estaba con el MAS como íntimos amigos. Estos personajes de la derecha jamás han hecho nada por el pueblo trabajador, y sólo los medios les dan cobertura. El MSM mismo proviene de las bases de la derecha hoy reciclada por la coyuntura que le toca vivir. Salieron a hablar contra el decreto porque afecta sus bolsillos, pero de ninguna manera defienden los intereses de la población.

Más allá de estos manotazos, *el gobierno del MAS terminó desbordado por la izquierda como no se había visto desde 2006.* Las protestas tuvieron un espectro *nacional*, porque el decretazo afectaba a la mayor parte de la población. La ola de protestas no demora en hacerse sentir. Desde el lunes 27 de diciembre la gente estaba en las calles. Pero lo que terminó de definir el descontento generalizado fue el discurso de Evo Morales del 29, donde aun poniendo en juego su prestigio no logra dar respuestas ni medidas serias para paliar la suba de precios. La población explotada decía en las calles: “Si no retrocede con el Gasolinazo, a Morales, así como lo subimos, lo bajamos”. ¡Toda una lección para tantos adoradores del progresismo que en el mundo hay!

Al otro día, 30 de diciembre, el pueblo alteño baja en marcha, no sin antes quemar las oficinas del peaje de la autopista y atacar las oficinas de la Alcaldía y la Federación de Juntas de Vecinos (FeJuVe).

Hay todo un descontento desde abajo contra las “malas direcciones”. El desborde de las bases era evidente. El pedido de derogación del Decreto 748 esta-

ba acompañado de la exigencia de “renuncia” de los ministros de Economía, Luis Arce Catacora; de Hidrocarburos, Fernando Vincenti, y de la presidenta de Aduanas, Marlene Ardaya. También *se pidió la renuncia del vicepresidente García Linera e, incluso, de Evo Morales.*

Ésta fue toda una novedad. A lo largo del año se pidió la renuncia de diversos ministros, pero plantear la renuncia del propio presidente expresó un cambio de los ánimos de la población, más allá de que el reclamo haya sido instrumentalizado, en parte, por la derecha o el MSM.

El punto culminante de las protestas fue la marcha del 30, que bajó hasta la ciudad de La Paz tratando de entrar a la Plaza Murillo. Allí fue reprimida por la Policía por varias horas. Por la tarde, otra movilización, esta vez de pobladores de La Paz, empieza a marchar con transportistas, magisterio y población que se iba sumando a la movilización. El centro de la ciudad quedó totalmente paralizado a causa de que el transporte público estaba movilizado. Ni siquiera vehículos particulares circulaban por la ciudad. Solamente se veían miles y miles de personas marchando por la urbe paceña.

Estas movilizaciones se dieron también en otras ciudades del país como Potosí, Oruro, Cochabamba y Santa Cruz. El país estaba mayormente paralizado. El gobierno minimizaba los hechos y las declaraciones de Evo Morales en CNN solamente sumaban más bronca en la gente. El oficialismo vio que el país se le venía encima y debió retroceder antes de que el conjunto de la situación se le desbordara. Sólo una hora y media antes que terminara el año, Morales anuncia la derogación del decreto. Dice haber “escuchado al pueblo”, pero intenta justificarse insistiendo en que “el Decreto era necesario” y que “se verá cómo se implementa en algún momento”.

Evo en persona está trabajando en esto, yendo a hablar con las organizaciones campesinas para que le terminen de dar el apoyo y explicando “lo necesario que es el aumento”. O sea, *la derogación se aplazó hasta que el MAS termine de comprar a las direcciones y garantizar que el país no termine incendiándose nuevamente.* Entonces sí, buscará darles el palo por la cabeza a los trabajadores.

El gobierno aprendió la lección a costa de quedar bastante desprestigiado. *El hecho que hay que subrayar, porque comienza a teñir toda la situación política del país, es que los fantasmas de Octubre de 2003 vuelven a estar presentes.*

AUMENTO DE SALARIOS YA. POR EL CONTROL OBRERO Y POPULAR DE LOS ABASTECIMIENTOS Y LOS PRECIOS

Ya comenzado 2011, *el gobierno exhibe una política cada vez más de espaldas a los trabajadores y a la población.* El intento de Gasolinazo fue una muestra categórica de ello, y si no prosperó fue por la verdadera rebelión popular que se comenzaba a poner en marcha. Sin embargo, los problemas continúan y plantean la salida a la lucha de los explotados y oprimidos desde una verdadera perspectiva a la izquierda del gobierno masista.

Cotidianamente se ve cómo el gobierno busca quedar bien con las multinacionales haciéndoles el juego para que sigan sacando jugosas ganancias, mientras la población hace filas de horas y horas para conseguir alimentos básicos que escasean cada vez más. Por otro lado, sectores de la población trabajadora, como los fabriles, salieron a pedir aumentos del 25%.

Lo que pasó en la localidad de Llallagua es sintomático: *la población se organizó y salió a conseguir los alimentos por sus propias manos*. Es que el encarecimiento del costo de vida ya es insostenible. Por supuesto, el gobierno salió inmediatamente a denunciarlos, como había hecho en otras ocasiones, acusando a sectores de derecha de propiciar estas acciones. Pero la base del problema es que, después del frustrado decreto, *los precios de los demás productos no bajaron y empieza haber escasez de alimentos*.

Al derogarse el decreto del Gasolinazo los precios supuestamente iban a “volver a la normalidad”, pero no fue así. Lo peor es que se anuncian mayores alzas de precios, como la leche y otros productos básicos. A todo esto, el MAS se hace el desentendido y acusa a los productores de la escasez o de especular con el contrabando; una justificación parecida a la de los combustibles.

La cuestión es que el gobierno jamás tuvo una política siquiera para paliar estas situaciones: *solamente le interesan las grandes inversiones y los acuerdos con las transnacionales*. Todos los anuncios de Evo Morales del 22 de enero eran en función de los grandes proyectos que involucran a empresas privadas, como la minería o la construcción de rutas, pero olvidando a la población trabajadora, a la que cada vez le cuesta más darle de comer a sus hijos.

En un país como Bolivia, donde la pobreza alcanza niveles dramáticos y que en todos estos años no ha bajado en lo más mínimo, no tener una política de alimentación seria es jugar con la vida de las personas. La Unidad de Análisis de Políticas Económicas y Sociales (UDAPE) señala que la línea de pobreza “moderada” está en el 59,3%, y la línea de la pobreza extrema, en el 32,7%.

Lo más descabellado que se ha escuchado por parte de los ministros es que “los alimentos también están muy bajos”, y que por eso los inversores se van del país... Al parecer, lo único que les importa es nivelar sus precios con los internacionales, como lo quieren hacer con los combustibles; esto es, una medida de corte neoliberal.

Pruebas al canto: EMAPA (Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos) ha subido el precio del azúcar por dos veces en un mes. Este alimento básico para la población se ha incrementado en más del 40%. La delirante idea del MAS de elevar los precios a niveles parejos con los de los países vecinos puede traer gravísimas consecuencias: el 31 de enero, en conferencia de prensa, la ministra de Producción del Desarrollo y Economía Plural, Ana Teresa Morales, dijo que la arroba de azúcar subirá de 61 a 86,50 bolivianos, mientras que el kilo se incrementará de 5,30 a 7,50. El supuesto “Estado en vías del socialismo” que tanto le gustaba anunciar al vicepresidente García Linera parece no tener más para ofrecer que eso: aumento tras aumento de los productos de la canasta básica familiar.

Mientras tanto, el Estado puede realizar una fiesta como la del 22 de enero “en homenaje al cumplimiento de un año del Estado Plurinacional”. Se gastaron 400.000 bolivianos, pero no se puede revertir la falta de alimentos o bajar sus precios para que la gente los pueda adquirir.

No obstante, desde el gobierno insisten en que impondrán el Gasolinazo. Así lo aseguró Linera, aduciendo que había encuestas según las cuales en El Alto y La Paz “apoyarían” estas draconianas medidas. Una mentira grosera, porque es inconcebible que la población pueda estar de acuerdo con pagar más y no tener para comer... con tal de que el supuesto “proceso de cambio” siga adelante.

Ocurre que *el MAS está desesperado por achicar un creciente déficit estatal*; de allí que salga a tratar de imponer medidas para recaudar y garantizar que los bonos, la base de la popularidad del gobierno, no queden desfinanciados. El bono Juancito Pinto cuesta 52 millones de dólares y no llega ni al 20% de la población. Lo mismo ocurre con el bono Juana Azurduy (otros 40 millones de dólares) y con el bono Dignidad.

El MAS ya no está tan seguro de seguir pagándolos tan libremente como antes. Esta problemática preocupa al gobierno: la recaudación ha bajado, mientras que las transnacionales le piden más ajuste porque sus ganancias no son tan buenas como les habían prometido.

Este escenario es reflejo de la crisis económica mundial. Como en Egipto, donde un motor de las protestas contra Mubarak fue el ajuste que pretendía llevar a cabo contra la población, en Bolivia el alza de los precios fue uno de los factores que sacó a las personas a las calles.

Por otra parte, el gobierno tampoco tuvo la mínima astucia de hacer cambios sustanciales en su gabinete ministerial. Si bien en los días anteriores al 22 de enero se rumoreaba que habría un “cambio radical” de los ministros, terminaron quedándose casi todos. Esto significa para toda la población que el presidente Evo Morales es el principal responsable de las medidas. *La excusa de que “la culpa no es del presidente sino de los ministros que lo aconsejan mal” ya no puede pasar más.*

El gobierno ha esgrimido todo este tiempo un discurso de tinte “nacionalista”. Pero hoy vemos cómo se gira cada vez más violentamente a la derecha. Las máscaras se han caído: *es evidente la política de ajuste*. Detrás del discurso de la “nacionalización del gas”, el MAS ha entregado cada una de las riquezas naturales que posee el país a las manos del imperialismo, como el Mutún, San Cristóbal, el litio y el gas: “El equilibrio, la transparencia y la eficiencia serán la luz que guíe nuestro camino. Podemos equivocarnos, podemos fallar, pero jamás traicionar o defraudar la confianza del Presidente y de nuestro pueblo”, decía hace un año el canciller David Choquehuanca. Por supuesto que lo de “no traicionar” no se refería a frenar la entrega de los recursos del país. Lo que de verdad quiere decir es que *irán a la rastra de cualquier empresa que les deje unas migajas a cambio de extraer materias primas*, y de paso contaminar el medio ambiente.

POR UNA BOLIVIA SOCIALISTA, OBRERA, CAMPESINA, ORIGINARIA Y POPULAR

Sólo hay una salida, y es la movilización. Hay que estar preparados contra los ajustes que quiera dar el MAS a la clase trabajadora. No podemos permitir que haya otro Gasolinazo, o varios mini gasolinazos, ni aumentos de los precios de los comestibles. Es hora de llamar a la unidad para combatir las arremetidas que quiere dar el gobierno. Para eso, es fundamental *imponerle a la actual dirección de la COB la huelga general y prepararse para reemplazarla en el próximo Congreso, imponiendo una dirección independiente del gobierno reformista.*

Porque lo que está faltando es la *unificación de las luchas*. Si bien en 2010 la clase obrera volvió a presente, no hubo más coordinación que una intersindical entre dos sindicatos; esto ha sido así en parte por las reiteradas traiciones de la COB, que tiran el proceso para atrás, pero también está el problema de la Confederación de Fabriles o de la Federación de Mineros, que le siguen haciendo el juego a la burocracia de la COB.

El hecho es que la actual dirección de la COB fue y es cómplice total del intento de Gasolinazo. Pedro Montes, ejecutivo de la COB, plantea que el incremento lo tienen que discutir los propios trabajadores: “Vamos a tener una evaluación y un ampliado. Allí se va a discutir cómo y cuándo hacer esta nivelación de los precios de los carburantes. Seguro el gobierno verá qué ministros son los culpables y los sacará”.

Como se ve, esta nefasta dirigencia está completamente de acuerdo con el aumento de los combustibles, pero maniobraron para no quedar como traidores absolutos. El colaboracionismo con el gobierno sólo se “fracturó” por unos días, y después volvió todo a la normalidad. Y ahora plantean que los trabajadores “discutan” cuándo y cómo se les tiene que reducir el sueldo por la mitad...

Ante esto, hay que avanzar en imponer una nueva dirección independiente en la COB y recuperarla para la lucha, al tiempo que se sale a pelear por un aumento salarial acorde con las necesidades de los trabajadores. No basta con el aumento proporcional a la inflación, ya que siempre se miente con las cifras. Tiene que ser proporcional a la canasta familiar. Por ende, los porcentajes de aumento *no pueden estar por debajo del 45 o 50%* para paliar la situación en que están los trabajadores. Al mismo tiempo, hay que *imponer el control obrero y popular de los abastecimientos y los precios.*

En los últimos meses se ha dado un proceso que revela más claramente el carácter capitalista del gobierno del MAS; ésta es una *novedad* sobre la que la izquierda revolucionaria debe salir a trabajar. La necesidad de la acción unificada de la izquierda revolucionaria, en momentos en que los grupos se invisibilizan en los grandes movimientos populares, es evidente. Las diversas corrientes socialistas revolucionarias debemos salir de nuestra burbuja, empezando por comprender que esas fuerzas, en Bolivia, estamos todavía reducidas a una pequeña vanguardia.

Ocurre que se hace imperativo *dar una expresión política de izquierda al desborde al gobierno masista*, que va creciendo. Existe el peligro de que sea el

centrismo burgués del MSM o incluso la derecha quienes capitalicen el desprestigio del gobierno.

Hay que poner en marcha una campaña unificada por un Instrumento Político de los Trabajadores, buscando que la iniciativa sea tomada por los sindicatos más combativos, en momentos en que crece el desborde por la izquierda al MAS y se renuevan las posibilidades de poner en pie una alternativa revolucionaria entre los trabajadores y la juventud.

Desde Socialismo o Barbarie Bolivia llamamos a *salir a las calles contra cualquier intento de aumento de los precios, por el control popular de los precios y abastecimientos, por la unidad de los que luchan por mejorar las condiciones de vida, por imponerle a la COB una verdadera huelga general y por una salida revolucionaria a los problemas del pueblo trabajador boliviano. La conformación de un Instrumento Político es una necesidad cada vez mayor en la situación de crisis actual, que vuelve a poner a la orden del día que la única salida para el país pasa por una Bolivia socialista, obrera, campesina, originaria y popular.*